

de ellos se hizo para tal objeto, con fecha 14 de Junio del presente año, y Considerando que no está probado que se haya apremiado á los quejosos á cumplir con la comision que se les encomendó, sino que hasta ahora aparece que la Asamblea municipal, usando de la facultad que le concede la ley de nombrar para el cargo de empadronador á todo ciudadano apto, se ha limitado á hacer ese nombramiento sin conminacion de ninguna especie; y que mientras no exista esta, ni sean forzados á desempeñar el espresado cargo, no se pueda declarar que haya habido violacion del artículo 59 constitucional, que ordena no poder ser nadie obligado á prestar trabajos personales sin su pleno consentimiento y sin la justa retribucion.

Con fundamento del artículo 101 de la Constitucion federal, se decreta.

Primero: que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 23 de Julio del presente año, que declaró haber lugar al amparo federal.

Segundo: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los CC. José D. Morales y Agripino Ugalde, contra el nombramiento de empadronadores que les confirió la autoridad municipal con fecha 14 de Julio del presente año.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 14 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, secretario.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa, por D. José Marcelino Gonzalez de Lopidana, como socio gerente de la casa de los Sres. J. de la Quintana y compañía, contra la providencia del C. Tesorero general del Estado, que les exige en moneda de plata y por medio de la facultad coactiva, la cantidad de mil doscientos nueve pesos cincuenta centavos, como rezago de una contribucion decretada por el C. Gobernador en Noviembre de 1871.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mazatlán, Mayo 23 de 1873. Vistos: el presente juicio promovido sobre amparo y proteccion por D. José Marcelino Gonzalez de Lopidana como socio gerente de la casa de los Sres. J. de la Quintana y compañía, contra la providencia del Ciudadano tesorero general del Estado, que les exige en moneda de plata y por medio de la facultad coactiva, la cantidad de mil doscientos nueve pesos cincuenta centavos, como rezago de una contribucion decretada por el C. Gobernador constitucional, Eustaquio Bucna, en Noviembre de 1871. Visto el informe de la autoridad ejecutiva del acto reclamado; lo pedido por el C. Promotor fiscal; los alegatos y pruebas presentadas por el quejoso, y todo lo demas que de autos consta y ver convino.

Considerando: Primero: que el C. Gobernador constitucional, en Noviembre de 1871, no tenia facultad para decretar el préstamo del uno por ciento sobre capitales bajo la condicion expresa de exigirse por la fuerza, como lo está ahora ejecutando el C. Tesorero, si no era satisfecho en los dias de su imposicion, lo cual era y es un ataque á la propiedad y á la persona del que sufre la fuerza contra lo expresa-

mente prevenido por la Constitucion federal en sus artículos 16 y 17.

Segundo: que el decreto de 16 de Agosto de 1872, dado en estado de sitio el Estado de Sinaloa por el C. Gobernador y Comandante militar, general Domingo Rubí, no es otra cosa que la aplicacion de la pena impuesta en el mismo préstamo por no haberlo satisfecho la referida casa en el término para ello señalado en el decreto que lo impuso, por cuya razón es tan inconstitucional como éste.

Tercero: que tal acoeracion se confirma, si se atiende á que no obstante el estado de sitio, el expresado Comandante militar no tenia facultades para hacer efectivo el préstamo ó sea tomar la propiedad ajena sin los requisitos determinados por el artículo 27 ya citado de la Constitucion, puesto que la garantía consignada en él, no quedó suspensa segun lo previno el artículo 8º del Supremo decreto de 8 de Mayo del mismo año de 1872.

Cuarto: que aunque no hubiera lugar á los anteriores considerandos, la parte quejosa ha probado suficientemente que el tal préstamo con su condicion ó amenaza de ser exigido y no pagado en caso de no enterarse en los dias de su imposicion, fué revocado por el C. Gobernador y Comandante militar Prisciliano Flores, en cambio de otro préstamo que impuso y le fué pagado por dicha casa J. de Quintana y compañía.

Quinto: que por esta razon y por la de estar ya en plena paz, cuya falta motivó el préstamo en 1871, el decreto del actual Congreso del Estado de 9 de Febrero último, que consideró al tal préstamo como rezagos y en cuya virtud obró el C. Tesorero, es atentatorio tambien á las garantías dichas, puesto que ademas de tener por fundamento un decreto anticonstitucional, el dicho préstamo ya estaba subrogado por otro y pagado segun las pruebas presentadas. Por tales fundamentos y de conformidad con la opinion del C. Asesor, fallo definitivamente juzgando con las siguientes proposiciones:

Primera: La Justicia de la Union ampara y protege á la casa de comercio de J. de la Quintana y compañía de que es socio gerente el Sr. D. José Marcelino Gonzalez de Lopidana, contra el embargo hecho por el C. Tesorero del Estado, exigiendo como rezagos del préstamo decretado en 12 de Noviembre de 1871, la cantidad de mil doscientos nueve pesos cincuenta centavos, por violarse con tal procedimiento, las garantías consignadas en los artículos 16 y 27 de la Constitucion federal.

Segunda: Notifíquese; remítanse copias de esta sentencia al "Boletín Oficial del Estado" y al "Semanario Judicial" para su publicacion, y los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision. El primer suplente en ejercicio del Juzgado de Distrito del Estado, C. Máximo Barragán, así lo proveyó y firmó por ante mí.—Doy fé.
—*Maximino Barragán.*—*Francisco Medina*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 20 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por D. Marcelino Gonzalez de Lopidana, como socio gerente de los Señores J. de la Quintana y compañía, contra el cobro que les hace el Tesorero general del Estado exigiéndoles en moneda de plata ó oro y por medio de la facultad económico-coactiva, la cantidad de mil doscientos nueve pesos cincuenta centavos, como rezago del préstamo forzoso decretado por el Gobernador de Sinaloa en 12 de Noviembre de 1871, con la conminacion de quedar convertido en contribucion para los que no lo enteraran en el plazo señalado: fundando los quejosos su resistencia al pago de ese préstamo, en que por las bases establecidas para su cobro ya por la ley que lo impuso, ya por los decretos posteriores que lo modificaron y volvieron á po-

ner en vigor, se vulnera la garantía consignada en el artículo 27 de la Constitución federal, violándose también la que otorga el artículo 16, al exigírseles ese impuesto sin causa alguna legal. Visto el fallo de 1ª instancia con lo demás que se tuvo presente y ver convino.

Y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 16, 27 y 101 de la Constitución de la República, se decreta: que por sus mismos legales fundamentos es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez 1º suplente de Distrito de Sinaloa en 23 de Mayo del presente año, que declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege á la casa de comercio J. de la Quintana y compañía de que es socio gerente D. J. Marcelino Gonzalez de Lopidana, contra el embargo hecho por el C. Tesorero del Estado, exigiendo como rezagos del préstamo decretado en 12 de Noviembre de 1871, la cantidad de mil doscientos nueve pesos cincuenta centavos.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Lic. Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 15 de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz,* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Hidalgo, por el C. Lucas Perez, contra los procedimientos del Receptor de rentas del Mineral del Monte, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Se ha impuesto el Promotor de los hechos que motivan el presente juicio de amparo interpuesto por el C. Lucas Perez, contra el C. Receptor del Mineral del Monte, por violacion de garantías, y cree que deben sujetarse á prueba, ya por razon de la duda que traen consigo, cuanto porque así lo ofrece el solicitante.

Por estas dos razones y con fundamento de los artículos 10 y 11 de la ley de la materia, esta Promotoría pide al Juzgado, se sirva abrir este negocio á prueba por el término que señalan dichos artículos.

Pachuca, Marzo 22 de 1873.—Firmado.—*M. Sanchez.*

Es copia que certifico. Pachuca, Julio 1º de 1873.—*F. Briseño.*

Alegato del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal; dice: que el C. Lucas Perez, presentó ocurso el 12 de Mayo próximo pasado, dando por causales, que el día 5 de Febrero último, cuando estaba para terminar su expendio de pulque, un guarda de la Receptoría del Mineral del Monte, declaró que habia hecho contrabando, recojiéndole del meson donde posaba, tres cueros llenos, otros vacios, y dos burros que el C. Receptor le embargó, porque no hizo el pago de ocho pesos setenta y cinco centavos, importe de derechos dobles. Añade por último, que siendo estos procedimientos con-